

CONFERENCIA

CAMBIO DE CICLO POLÍTICO*

Ernesto Ottone

Universidad Diego Portales

RESUMEN: En esta conferencia, realizada en el Centro de Estudios Públicos, el autor desarrolla la idea de por qué Chile enfrenta un nuevo ciclo político, que nace del propio desarrollo alcanzado y de los desafíos que éste le ha puesto al país por delante, los que demandarían el ímpetu reformador que orienta al actual Gobierno.

PALABRAS CLAVE: democracia, malestar social, Michelle Bachelet, reformas.

RECIBIDO: marzo 2014; ACEPTADO: abril 2014.

POLITICAL CYCLE CHANGE

ABSTRACT: *At this conference, held at Centro de Estudios Públicos, the author discusses the idea of why Chile is facing a new political cycle born from the stage of development that it has attained and from the challenges that development presents for the country in the days ahead, which would require the reformative momentum now guiding the present Administration.*

KEYWORDS: *Democracy, social unease, Michelle Bachelet, reforms.*

RECEIVED: *March 2014; ACCEPTED: April 2014.*

ERNESTO OTTONE. Sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, Universidad de París III, La Sorbonne Nouvelle. Fue Director de Análisis Estratégico de la Presidencia, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). Hoy es profesor titular en la Universidad Diego Portales, profesor adjunto en la Universidad de Chile y catedrático del Colegio de Estudios Mundiales (Cem/MSH) de París. Email: ernesto.ottone@udp.cl.

* Este texto fue preparado por el propio autor a partir de la conferencia que él dio en el CEP el jueves 13 de marzo de 2014.

1. ¿QUÉ ES UN CAMBIO DE CICLO POLÍTICO?

Se ha incorporado con fuerza al análisis político en Chile el concepto de cambio de ciclo político.

Las interpretaciones son variadas. Algunas aparecen ligadas a cierta asimilación de este cambio con un cambio de ciclo económico, y al agotamiento del llamado modelo económico del cual el cambio de ciclo político sería más bien un epifenómeno.

Es cierto que nunca podemos separar completamente la economía de la política. Resulta importante, sin embargo, no caer en automatismos o determinismos que pueden conducir a visiones con poca capacidad interpretativa.

Si bien los fenómenos que se desprenden del estilo de desarrollo económico influyen sin duda en el campo de la política, existen amplios márgenes de autonomía de ésta, como asimismo factores sociológicos y culturales que tienen en ocasiones una importancia mayor.

En primer lugar, conviene señalar que en Chile efectivamente ha habido un cambio de ciclo político y que ese cambio no se gestó de un día para otro, sino que se fue acumulando en la medida en que el ciclo anterior perdía vigencia y decrecían en eficiencia y efectividad los factores que aseguraban su funcionamiento, hasta que entró en crisis.

Como suele suceder en otros planos de la vida, los actores políticos, sus principales interesados, fueron los últimos en percibirlos.

¿Pero qué significa un cambio de ciclo político? Significa que se ha producido un agotamiento de un pacto explícito o implícito de convivencia política, donde se funcionaba a través de una relación de conflictos y acuerdos en base a reglas y fronteras de alguna manera aceptadas, dentro de un marco compartido con mayor o menor entusiasmo, en el cual había una especie de sentido común de cómo funcionaba la política y se tomaban las decisiones.

Ese ciclo se termina porque una parte de la sociedad ya no lo acepta, o lo acepta a regañadientes, con el convencimiento que dicha convivencia no le conviene para sus aspiraciones, le resulta injusta y considera que quienes actúan en política dentro de dicho marco ya no los representa, o los representa débilmente, todo lo cual produce una deslegitimación del sistema político.

Las formas en que se expresa dicho agotamiento son conocidas. Se manifiestan en un malestar que se refleja a través de un descontento de una

parte mayoritaria de la sociedad tanto con la institucionalidad pública como los poderes del Estado, así como a través de una crítica al funcionamiento del mundo privado, las lógicas de mercado y la forma como éste actúa. Vale decir en un malestar hacia lo público, que se resume en que los mandatos son ineficientes cuando no corruptos, y de un malestar hacia lo privado, que se resume en la percepción de abuso cuando no de explotación.

Dicho malestar se expresa en las encuestas demoscópicas, en manifestaciones callejeras y en las redes sociales. En política, suele asumir la forma de una apatía electoral, un desinterés por la acción de los políticos y una indistinción de sus diferencias: “son todos lo mismo”. En todas las mediciones caen la prensa, la televisión, los carabineros, las fuerzas armadas, la iglesia. En pocas palabras, se acentúa una desconfianza generalizada.

Curiosamente los agotamientos de los ciclos políticos no obedecen siempre a desarrollos negativos en los países.

En ocasiones, sí obedecen. Se producen con ocasión de crisis económicas, de malos gobiernos, de corrupciones extendidas de la clase política, de procesos inflacionarios galopantes, de formas de autoritarismos y arbitrariedades desde el poder. Son especialmente nítidos cuando la gente siente que ha perdido algo que ya tenía. Recuerdo siempre aquella pancarta que vi en París llevada por una liceana que decía: “Queremos vivir como nuestros padres”.

Pero un ciclo político se puede agotar también producto de avances muy rápidos de una sociedad que genera nuevas aspiraciones, mayor conciencia de velocidades sociales distintas en el crecimiento y por un empoderamiento político generado por una mayor capacidad reflexiva y una aspiración más fuerte de movilidad social, que hace más notorios los desequilibrios del cambio.

Éste es el caso de Chile, cuyas cifras de desarrollo en los últimos veinticuatro años son notables en materia de crecimiento, de cobertura escolar —incluida la educación superior—, niveles de atención social, mejoramiento salarial, regulaciones, generación de infraestructura, disminución de la pobreza y la indigencia, expansión de las libertades democráticas, paz social y restablecimiento del respecto a los derechos humanos.

Por lo tanto, el malestar es producto más del éxito que de la catástrofe. Si tomamos una posición más pesimista podemos decir, a lo más, que es producto de los defectos, desequilibrios y límites de esos avances objetivos.

Sin embargo, el malestar que surge del crecimiento no es necesariamente más tenue del que surge de una situación negativa. Puede ser muy duro y crispado. La política no es el reino de la gratitud y el reconocimiento. Aunque las políticas públicas hayan afectado positivamente las vidas de muchos, el reconocimiento puede ser muy leve, casi ingrátido, mínimo en comparación con la percepción crítica de lo que faltó, de lo que no se logró.

En Chile esa crítica adquiere tres dimensiones discursivas.

Una se dirige al Estado y, en particular, al sistema político, la política y los políticos. Se centra en el nivel de los servicios que el Estado le debe prestar a la ciudadanía, que considera que están muy lejos de sus expectativas. Si el Estado es más próspero, ¿por qué sus recursos no se usan mejor y no me llegan? ¿Quién se queda con el trozo de PIB per cápita que no recibo? Los políticos son los culpables. No cumplen, se arreglan entre ellos, trabajan para ellos. En el límite, son una banda de corruptos, que reciben enormes sueldos por hablar y no hacer nada. Por lo tanto, no saco nada con ir a votar; luego, si no me castigan, no voto. El Estado no me protege suficientemente ni de las desigualdades ni de los riesgos.

Otra crítica se dirige a la economía de mercado. Con este sistema económico los beneficiados no somos todos, ni siquiera la mayoría. Quienes se llevan la parte del león son las grandes empresas, cuyos dueños y grandes ejecutivos viven en otro mundo, donde tienen de todo. Mientras tanto, mi salario es bajo, apenas llego a fin de mes y, como quiero vivir mejor, me debo endeudar y al hacerlo pago mucho más. Vea usted La Polar, las isapres, las AFP, las cuentas de la luz, del agua, del gas del teléfono, que engañan y me estafan.

Quiero que mis hijos se eduquen, para lo cual me vuelvo a endeudar. La educación gratis es mala; la pagada, mediocre. La educación superior es cara y a las buenas universidades es difícil llegar. En consecuencia, nuevamente alguien abusa de mí, ya sea en el trabajo, a través de los salarios bajos, o en el consumo, a través de la letra chica. ¿Dónde están mis derechos?

La tercera crítica apunta a la discriminación social. Si el Estado no me protege lo suficiente y el mercado abusa de mí, el mérito cuenta sólo muy relativamente para mejorar mis condiciones de vida. Estoy muy determinado por un conjunto de adscripciones, de cuna, de escuela, de barrio. Si no tengo redes, no tengo apoyos, compito en desventaja.

Nada de raro entonces que las élites no se renueven, que mis avances tengan un tope social difícil de franquear.

Este sentimiento de malestar tridimensional no alcanza a presentar un proyecto globalmente alternativo sino una sumatoria de humores, críticas y requerimientos diversos, que no se transforman en lo inmediato en una polarización política y una desinstitucionalización de corte populista, pero que podrían emprender ese camino de no recibir respuestas por parte de un sistema político que encauce las aspiraciones por medio de hechos materiales y simbólicos y generando un cambio de percepción.

El triunfo de Michelle Bachelet, quien venció las elecciones presidenciales del año 2013, responde a un carisma que va más allá de la política y es un intento de ensayar una respuesta a estas aspiraciones.

Ella hizo un esfuerzo por escuchar las voces de la “democracia continua”¹, para usar el término de Stefano Rodotà, aquellas nuevas formas de expresión democrática, que van más allá de las instituciones clásicas de la democracia representativa, ya sea a través de los movimientos sociales, las redes digitales o la calle, y tiende a expresar directamente sus opiniones, humores, indignaciones y exigencias.

Reflejó, además, en su programa de gobierno un nuevo ciclo de reformas que tiene en su centro caminar hacia una sociedad más igualitaria, a través de una reforma tributaria y una reforma educacional importante, como así mismo completar el proceso de democratización, a través de una nueva constitución que consagre un Estado de derechos. También lo hizo a través del diálogo con líderes del movimiento estudiantil y territorial, algunos de los cuales en total autonomía fueron elegidos diputados en espacios donde la coalición de la Nueva Mayoría les entregó su apoyo.

Se trata entonces de una experiencia interesante que en vez de contraponer las reglas democráticas exigidas por Bobbio, y la elaboración neobobbiana² a las nuevas formas que asume la expresión política y al malestar reinante, busca generar complementariedades para construir la democracia del siglo XXI.

No sabemos si esta experiencia será exitosa, pero la falta de conciencia de esos cambios y la no innovación política con seguridad nos habrían conducido a un debilitamiento del camino democrático emprendido hace veinticuatro años.

¹ Stefano Rodotà, *Tecnopolítica. La democracia y las nuevas tecnologías de la comunicación* (Buenos Aires: Losada, 2000).

² Michelangelo Bovero, “Las condiciones de la democracia. Una teoría neobobbiana”, en *Pensamiento global II*, ed. Ernesto Ottone (Santiago: Universidad Diego Portales, 2012).

2. EL CICLO ANTERIOR

Para plantearse un nuevo ciclo de reformas es necesario que exista un ciclo anterior, y para entender las características, logros y límites de ese primer ciclo es necesario tratar de explicar su origen y formación.

En Chile, la transición de la dictadura militar a la democracia no fue el resultado de una lucha insurreccional armada. Las acciones armadas propugnadas por el Partido Comunista a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fracasaron y fueron derrotadas.

Fueron formas de resistencia ciudadana y de actividades políticas democráticas las que comenzaron a ganarle espacio a la dura represión, hasta lograr vencer en un plebiscito que la dictadura había ideado como un instrumento de legitimación. Las fuerzas democráticas generaron, además, una presión nacional e internacional que obligó al dictador a reconocer el resultado mayoritario.

La disyuntiva no se tradujo en una transición sin pactos e inmaculada, sino que se trató de una combinación de los avances posibles hacia la democracia en un campo de fuerza donde quienes eran favorables a la dictadura poseían el control de las Fuerza Armadas, de la prensa y la enorme mayoría de los medios de comunicación, de las cúpulas de los dirigentes empresariales y del 40% de los votos que habían apoyado la continuidad de Pinochet en el plebiscito. Si bien la Concertación por la Democracia era mayoritaria en votos, la derecha pro dictadura poseía apoyo ciudadano y el conjunto de los “poderes fácticos”.

Por lo tanto se pactó un conjunto de reformas democráticas, pero se dejaron afuera otras, que tuvieron que esperar largos años para ponerse en práctica.

Aylwin, pese a ganar las elecciones de 1990, hubo de aceptar que Pinochet continuara como Comandante en Jefe del Ejército.

El acento fue puesto no en cambiar radicalmente el modelo económico neo liberal que acompañaba a la dictadura, sino en modificarlo gradualmente. Así se aprobó una primera reforma fiscal, que permitió poner en práctica políticas sociales y mejorar salarios, salud y protección social. Se inició también la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que se abocó a investigar la violación de los derechos humanos con resultado de muerte cometidos entre 1973 y 1990, cuyas conclusiones fueron desconocidas por los militares, pero que constituirían la base moral sobre la cual

actuarían, juzgarían y encarcelarían más tarde los tribunales de justicia a los principales agentes de la represión.

En eso se concentraron los primeros esfuerzos realizados por los gobiernos democráticos.

Manuel Castells expresa de la siguiente manera la discontinuidad del período democrático respecto a la dictadura: “Aquel modelo de desarrollo (el de la dictadura) excluye de los beneficios del crecimiento a gran parte de la población mediante el ejercicio autoritario e incontrolado del poder del Estado, al tiempo que prioriza los mecanismos de mercado sobre los valores de la sociedad, sin aplicar políticas correctoras de las desigualdades y de los privilegios de las élites sociales y económicas”³. El período democrático lo caracteriza, en cambio, como:

Un modelo de desarrollo gestionado a partir del Estado democrático resultante de la libre elección de los ciudadanos, que manteniendo los mecanismos de mercado como forma esencial de asignación de recursos, implementa políticas públicas encaminadas a la inclusión del conjunto de la población a los beneficios del crecimiento, en particular mediante una política fiscal redistributiva y un esfuerzo creciente de políticas públicas en la mejora de las condiciones de vida de la población a través de la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura de servicios, los equipamientos sociales y culturales, las ayudas y subsidios a personas necesitadas.

El modelo es también incluyente porque establece mecanismos de negociación y consulta con los actores sociales, buscando la elaboración de políticas económicas y sociales mediante un consenso con los representantes de los distintos grupos de intereses existentes en la sociedad.⁴

Los elementos contenidos en el análisis de Castells se realizaron con mayor o menor éxito en un periodo de veinte años, y aunque perdieron velocidad durante el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, no fueron anulados. El gobierno de Piñera no propuso una restauración borbónica, sino más bien una continuidad a un ritmo más lento, que aceleró las exigencias de cambio por parte de la población.

³ Manuel Castells, *Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial* (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2005).

⁴ *Ibidem*.

Para entender el peso, en ocasiones excesivo, de la gradualidad del proceso chileno, basta señalar que al asumir la Presidencia Ricardo Lagos, primer presidente de izquierda de la coalición de centroizquierda, en el año 2000, cuando habían transcurrido diez años de gobiernos democráticos, todavía existía censura de prensa, censura cinematográfica y la pena de muerte; no había ley de divorcio; el Presidente no podía remover a los jefes de las fuerzas armadas; teníamos senadores designados que sesgaban las mayorías electas y un Consejo de Seguridad Nacional que tenía la facultad de tomar decisiones frente a asuntos de Estado, conformado por militares y civiles y que podía ser citado al margen de la voluntad del Presidente o el parlamento. Todo ello se cambió en ese gobierno.

Fue en ese gobierno también que se creó la comisión Valech sobre la tortura, que ha significado hasta hoy una innovación mundial en el terreno de los derechos humanos.

No hubo, sin embargo, la fuerza parlamentaria suficiente para cambiar un sistema electoral que tiende al empate permanente y excluye a las fuerzas minoritarias.

La discusión sobre la posibilidad de haber logrado entonces una mayor profundidad de los cambios, que siempre es un debate contrafactual, resulta imposible de dirimir.

Con los ojos de hoy, se podría pensar que hubo un exceso de prudencia, que se podía haber avanzado más y más rápido en el proceso de democratización y también en las transformaciones que hubieran aumentando la internacionalidad de las políticas públicas, de manera tal de modificar el estilo de desarrollo neoclásico.

Podría haber sido pero no fue, y no tan sólo por no haber contado nunca con una mayoría parlamentaria, sino por errores de apreciación o incluso una posible “naturalización” de ciertos esquemas neoclásicos heredados de la dictadura.

Precisamente estos aspectos han generado una fuerte crítica al proceso de transición democrática en Chile, pero conviene también hacer la crítica de la crítica para lograr una visión más certera.

Para formarse un juicio equilibrado de la obra de esos gobiernos conviene situarlos en los momentos históricos en que tuvieron lugar, las condiciones económicas sociales, políticas y morales en que se hicieron cargo del país, el peso de las fuerzas que estaban en juego y el nivel de apoyo en la ciudadanía con que contaban. En fin, todo aquello que hace que la acción

política no sea sólo voluntad sino también realidad, o como decía Maquiavelo: no sólo virtud sino también fortuna.

En ocasiones, la crítica sobrevuela distraídamente esos factores y en los errores cometidos, en las audacias no realizadas, en las prudencias consideradas excesivas ve solamente una ausencia de voluntad de cambio, un espíritu pusilánime en el mejor de los casos o de compromiso cuando ella es más acerba.

Se critica radicalmente la idea de que fue necesario caminar a un cierto ritmo, dar algunos pasos primero para posteriormente dar otros, señalándose que el cambio político no sigue ese orden.

Efectivamente, no siempre la política es ordenada. Por el contrario, está llena de saltos y avatares. Pero un proceso que se propone un cambio reformador procura precisamente contrarrestar aquello y establecer una secuencia que contribuya a preservar bienes que le son simultáneamente caros: la libertad y la tendencia a la igualdad, procurando conseguirlos a través de un camino más lento pero pacífico, que no concluya en una ruptura social ni en un retroceso violento.

A los gobiernos de la Concertación se les puede encontrar muchos defectos, pero no se les puede pedir algo que no prometieron ni se propusieron llevar adelante: la realización de cambios revolucionarios, expropiar a los expropiadores, desarrollar la lucha de clases y destruir el capitalismo o algo que se le parezca.

Es como si a Léon Blum se le criticara por no haber impulsado una revolución proletaria en 1936, cuando dirigió el gobierno del Frente Popular en Francia. No fue elegido para eso Léon Blum, sino para dirigir un gobierno progresista de coalición, que introdujo apenas algunas reformas sociales que, sin embargo, conforman hoy un referente profundo en el imaginario político francés. Cometió grandes errores, pero no el de haber renunciado algo que jamás estuvo en sus planes, cosa que señaló alto y claro desde el primer minuto.

De la misma manera, los gobiernos de la Concertación no nacieron para llevar adelante un programa de ruptura revolucionaria. Nacieron para conducir al país de la dictadura, la intolerancia, la violación de los derechos humanos y la ausencia de libertades a un funcionamiento democrático.

Nacieron para salir de una visión doctrinaria que consideraba “las aguas heladas del cálculo egoísta” del mercado no sólo como el organizador de la economía sino de la sociedad en su conjunto, hacia una sociedad

donde se alarga el poder ciudadano, generando políticas públicas que intentan morigerar la brecha de desigualdad, disminuir la pobreza y generar servicios y prestaciones públicas más extendidas.

En fin, nacieron para realizar reformas que favorecieran a la mayoría. Con defectos y límites, pero también con éxitos y virtudes. Fue en ese sentido que se recorrió un camino, y ese camino es el que se debe analizar.

Nada de lo anteriormente dicho anula la pertinencia de la crítica.

En este camino reformador, sin duda, muchas cosas se hicieron mal o no se hicieron pudiéndose haber hecho. ¿Hubo excesos de prudencia? Seguramente sí, y lo vemos mejor con los ojos de hoy. ¿Por qué nos parecía aceptable, más allá de nuestras críticas, un sistema de educación superior laxo en sus controles, donde los negocios articulados a triquiñuelas legales parecían “que estaban en el orden de las cosas”? ¿Por qué parecía incontestable la decadencia de la educación pública?

En muchos terrenos estos mismos análisis se pueden y se deben hacer, de manera autocrítica, sin volcar toda la responsabilidad en la ausencia de mayoría parlamentaria o en la actitud de la derecha, que defendió, como era esperable, hasta donde le fue posible la herencia de la dictadura.

Sin embargo, pese a todos estos defectos y límites, no cabe duda que no se puede encontrar otro período de toda la historia de Chile donde el país haya avanzado tanto prácticamente en todos los campos.

Entre 1990 y el 2011 Chile creció a un promedio de 5 por ciento al año. Cuando concluyó la dictadura, Chile tenía un PIB per cápita menor a los 5 mil dólares; hoy bordea los 20 mil en paridad de compra. De acuerdo a la Cepal, la pobreza en Chile al finalizar la dictadura alcanzaba a 38,7 por ciento de la población; hoy alcanza al 11,5 por ciento. En 1990, los estudiantes de educación superior eran alrededor de 200 mil y hoy superan el millón, de los cuales más del 80 por ciento son los primeros en sus familias que conocen el nivel de educación superior⁵.

Estas cifras dan cuenta de un salto espectacular del desarrollo, que coloca a Chile a la cabeza del avance latinoamericano en casi todos los planos. Sin embargo, las mediciones demoscópicas si bien muestran un país optimista respecto al progreso, no muestran a un país conforme con el nivel de bienestar y con la calidad de vida que lleva, sino algo gruñón y desconfiado.

⁵ El conjunto de las cifras fueron sintetizadas por el autor teniendo como fuentes a Cepal, FMI y OECD.

¿Qué explica este desfase?

Sin duda, los chilenos viven mejor que las generaciones anteriores, pero los medios de comunicación y autocomunicación les muestran un mundo al que pueden acceder simbólicamente, pero no siempre materialmente, al menos en el nivel que quisieran.

Son más escolarizados, más secularizados, más libres, más descreídos, más desconfiados y detestan las estructuras de cooptación jerarquizadas en base a redes “clasistas”, a las cuales no tienen acceso a través del mérito.

Quieren una mayor integración a la oferta del mundo global, pero a la vez desean un Estado fuerte, protector y morigerador de las desigualdades sociales, del cual exigen transparencia, eficiencia y una mejor calidad en las respuestas a sus demandas. La incompreensión que mostraron los partidos de centroizquierda de estos fenómenos fue políticamente castigada y perdieron las elecciones en el año 2009.

Aunque este fenómeno venía incubándose desde antes, cristalizó durante el gobierno de la derecha, que había prometido no desarticular las políticas públicas pero responder con mayor eficiencia, llevando “al público las virtudes del privado”.

La ausencia de esa respuesta, por un gobierno que mostró una escasa capacidad de gestión, una idea pobre del Estado y una ausencia de sensibilidad y redes de articulación con la sociedad para recoger las nuevas demandas, terminó reforzando un malestar que, por momentos, sobrepasó al sistema político en su conjunto, aunque sin llegar a expresiones violentas generalizadas.

Ello dio origen a movimientos masivos de los estudiantes, a reacciones duras de las minorías étnicas y a reivindicaciones de las regiones que más requieren —por su lejanía de la capital o por su menor grado de desarrollo— de una presencia eficaz del Estado.

El gobierno de Sebastián Piñera mantuvo así un bajo apoyo, que concluyó en una debacle electoral de la derecha, pese a que el país, fruto principalmente de una coyuntura económica positiva de América del Sur, tuvo buen nivel de crecimiento —5,4 puntos del PIB de promedio— y bajas tasas de desempleo.

El gobierno de Michelle Bachelet hereda un país con esas características, en una coyuntura económica regional que tiende a la baja, pero a la cual se agregan dos tendencias de largo plazo y cuya corrección será lenta porque obedece a características más globales de la sociedad de la información.

La primera es la necesidad de vincular la espontaneidad del movimiento social a la necesidad de un orden institucional, o en palabras de Jacques Julliard: “Encauzar el caballo desbocado de la opinión pública en las reglas de la democracia”⁶. Para ello es necesario comprender el surgimiento de un nuevo individualismo, no necesariamente antisolidario pero exigente de la propia singularidad, donde lo colectivo no es atrapado a través de las antiguas categorías de la organización social, sino que se organiza en redes cambiantes, donde muchas veces lo social, lo cultural y lo político conforman un enrevesado universo difícil de descifrar y con el cual la negociación por parte de las instituciones de la democracia representativa no es fácil.

La segunda tendencia de largo plazo es que las instituciones clásicas de la democracia representativa, incluso en Chile, donde no se ha producido un retroceso —ni mucho menos— en materia económica y social como en algunos países de Europa, el sistema político democrático es cuestionado. Los partidos políticos se tienden a ver muy lejanos de los intereses de los ciudadanos, lo que reproduce una situación que se vive a nivel global.

En materia de igualdad en la distribución del ingreso, las cifras han mejorado mucho aunque muy lentamente y a partir de una sociedad históricamente muy desigual. Desde mediados de los años 80 se ha avanzado de un Gini de 0,58 a uno de 0,50 hoy, pero hablamos siempre de cifras muy altas, que constituyen un nivel de deformidad social enorme para un país que no está lejos de alcanzar el umbral de desarrollo.

Los avances en cobertura en educación no se acompañan con la calidad y equidad de los procesos formativos y educativos. El desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología es bajo, como asimismo los niveles de productividad. Para asegurar su futuro, Chile requiere una transformación productiva con mayores niveles de igualdad en los ingresos, y sin las grandes diferencias que existen entre los diversos territorios.

3. TRANSFORMACIONES SOCIALES Y TURBULENCIAS POLÍTICAS

Las cifras entregadas algo dicen sobre los múltiples cambios que implican para una sociedad en un período históricamente breve, sobre todo cuando se realizan en el marco de una transición democrática.

⁶ Jacques Julliard, *La Reine du monde: Essai sur la démocratie d'opinion* (Paris: Flammarion, 2008).

El elemento más significativo es la progresiva pérdida del miedo en una sociedad acostumbrada durante 17 años a la omnipresencia de un poder omnipotente y sin límite, donde la obediencia era el principio normativo por excelencia, mientras que el ejercicio de la ciudadanía y las libertades individuales y colectivas era escaso y significaba riesgos enormes.

Esa pérdida gradual del miedo de una sociedad con escasa iniciativa desde abajo, que vivía bajo un disciplinamiento exagerado, fue abriendo paso hacia un empoderamiento ciudadano que iba de la mano de una mejoría de la situación económica de quienes han ido abandonando la pobreza y entrado a formar parte de una nueva clase media, todavía precaria, que teme volver atrás. A eso se suma que en rigor, como señala Fernando Henrique Cardoso, “no constituyen todavía clases medias: son nuevas categorías de renta. Ganan más, pero aún no tienen una formación cultural común, ni redes sociales comunes. No se constituyen como clases en el sentido sociológico. Son clases fragmentadas, pero que van a constituirse y van aspirar a más”⁷.

Esa aspiración ascendente, que responde a la vieja sentencia de Tocqueville “cuando más se tiene, más se nota lo que falta”, se constituirá en un malestar creciente, que podría erróneamente asimilarse con el malestar de la actual Europa del sur, donde el futuro de los hijos aparece más oscuro que el presente de los padres.

En Chile, sin duda, el futuro de los hijos se vislumbra mejor que el de sus padres. Incluso más, su presente es mejor que el pasado de sus padres. Sin embargo, no es lo suficientemente bueno ante el crecimiento de sus aspiraciones, lo que genera una posición extremadamente crítica frente al sistema político, que muestra a las instituciones como un mundo alejado de sus intereses y a los políticos como seres privilegiados, más preocupados de sus carreras que del bien público. Poco importa que los niveles de corrupción en Chile estén entre los más bajos del mundo, la percepción es negativa, sobre todo hacia el parlamento y los parlamentarios. Es apenas más positiva respecto al poder ejecutivo.

Ello explica la caída del universo electoral cuando se pasó del sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio al de inscripción automática y voto voluntario.

⁷ Fernando Henrique Cardoso, “América Latina en el mundo global”, en *Pensamiento global II*, ed. Ernesto Ottone (Santiago: Universidad Diego Portales, 2012).

Si bien esa caída no es dramática, tuvo un efecto mínimo en la atracción del voto joven y alejó una parte del voto menos interesado en la política, que suele ser más bien de derecha. En los hechos, el nuevo padrón electoral ha favorecido hasta ahora a la coalición de centroizquierda.

El conjunto de estos fenómenos clausuraron el primer ciclo político de la democracia chilena post dictadura.

Un conjunto de virtudes políticas ayudaron mucho al relativo éxito de ese primer ciclo, virtudes que se expresaron en una unidad perseverante entre las tendencias centristas y de izquierdas de la coalición que dirigió los primeros cuatro gobiernos democráticos, un espíritu suprapartidario, una visión compartida de la reconstrucción republicana y una capacidad de lograr compromisos con la oposición, todo lo cual produjo una gobernabilidad de alta calidad.

Las dificultades que pusieron fin a ese ciclo se deben principalmente a los errores políticos que se empezaron a producir. El predominio de agendas mezquinas y particularismos, así como las malas prácticas de los partidos políticos, separaron la acción del gobierno de la de los partidos políticos que debían sustentarlo, pero que en la práctica aparecían volcados a sus pequeños negocios y no lograron leer a tiempo las transformaciones sociales y culturales existentes, lo que generó una caída de calidad de su quehacer, la ausencia progresiva de sentido colectivo de un número de sus dirigentes y representantes, la preeminencia de lógicas de puro poder y la generación de clientelas en torno a jefes de facción que tendieron a producir una selección adversa del personal político, una escasa renovación generacional y la pérdida de espíritu coalicionista.

Estos factores son los que explican básicamente la derrota electoral del año 2009 y el triunfo de un gobierno de derecha que aceleró el fin de ciclo.

4. UN NUEVO CICLO POLÍTICO

La elección de Michelle Bachelet le ha entregado a una nueva coalición una oportunidad apenas merecida de llevar a cabo un segundo ciclo de reformas, y con ella la posibilidad de recuperar una mejor relación con la sociedad que le permita recuperar credibilidad, confianza y cercanía.

Esto implica no sólo el conjunto de reformas que conforman el segundo ciclo de ellas, sino también una mejor calidad de la política, una nueva forma en la cual los políticos conciban su rol de representantes.

Los partidos políticos del siglo XXI no deberían ser considerados propiedad ni sus fundadores ni de sus dirigentes, ni siquiera de sus militantes. Deberían procurar transformarse en instituciones dirigidas al bien público, capaces de representar una propuesta de sociedad, así como una metodología de hacer política sometida al escrutinio ciudadano.

De no ser así, se corre el peligro de terminar también en Chile con la caída del sistema político y convertir su democracia en algo similar a las “autocracias electivas”⁸, las “democracias delegativas”⁹ o los “regímenes neojacobinos”¹⁰, donde las reglas democráticas se cumplan apenas de fachada. Allí las instituciones de la democracia representativa son manipuladas, el clima político se polariza a niveles extremos, en vez de adversarios políticos comienza a imperar la relación “amigo-enemigo” de Carl Schmitt, los avances económicos y sociales comienzan a sufrir la ausencia del procesamiento pacífico de las diferencias y se empieza a demandar a quienes posean el monopolio de las armas que tomen partido por uno u otro bando.

Los países que caen en este camino, ya sea orientado por un populismo de izquierda o derecha, suelen producir actores políticos carentes de flexibilidad, con ideas simples y precarias y dispuestos a eternizarse en el poder todo el tiempo que “la patria los requiera”.

Termina así no ampliándose la democracia representativa mediante la incorporación de nuevas formas de expresión popular, sino que ella se restringe por culpa de liderazgos mesiánicos o populistas, dispuestos a gobernar a través de sistemas plebiscitarios. La momentánea “vibración del consenso” con el pueblo a la que suelen apelar esos líderes termina por sobrepasar la legalidad y romper el paradigma democrático construido con fatiga en el curso de muchos años.

El sistema político chileno, más allá de sus muchas imperfecciones, está a tiempo para plantearse las reformas necesarias que eviten un camino regresivo y permitan alcanzar en democracia un desarrollo equitativo, aquel que no es medido sólo por un crecimiento sostenido en el tiempo, sino que implique una notable mejora en los niveles de distribución del ingreso, mayores niveles de cohesión social y pluralismo, amplios canales de movi-

⁸ Bovero, “Las condiciones de la democracia”.

⁹ Guillermo O’Donnell, “Nuevas reflexiones acerca de la democracia delegativa”, en *Democracia delegativa*, ed. Guillermo O’Donnell, Osvaldo Iazzeta y Hugo Quiroga (Buenos Aires: Prometeo, 2011).

¹⁰ Ernesto Ottone, “Izquierdas, centro izquierdas y progresismos en América Latina hoy: Algunas distinciones”, *Estudios Públicos* 118 (2010).

lidad social, una densidad democrática sólida, y altos niveles de probidad, eficiencia y responsabilidad pública, sustentados en un tejido ciudadano culturalmente tolerante.

Para lograrlo el nuevo gobierno de Michelle Bachelet ha propuesto un cambio de eje en la tradición reformadora de la centroizquierda chilena, pasando de la construcción republicana y las políticas públicas destinadas a bajar de manera significativa la pobreza a un nuevo eje, que es el de una sociedad más igualitaria. Ello significa pasar a una nueva generación de reformas que puedan remover tendencias centenarias del país.

En primer lugar se plantea una reforma tributaria, que dé pasos importantes en una tributación progresiva, que signifique mejorar la distribución de la renta a través de una mayor contribución al menos de la parte superior del décimo decil, que es donde se concentra la mayor riqueza. Se trata en la práctica de un nuevo pacto, donde algunos verán moderados sus beneficios. Hacerlo no es fácil, pues como no se trata de una algarada populista, lo que se plantea es llevarlo a cabo asegurando la vigencia de las reglas del juego en un clima de gobernabilidad.

En segundo lugar, con el objeto de construir en el largo plazo una sociedad más igualitaria, se plantea una profunda reforma educacional, que parta por fortalecer la educación pública de calidad y que abarque todas las etapas de la educación, desde la preescolar a la educación superior, transformando el modelo privatizador heredado de la dictadura en un sistema donde no prevalezca el lucro, se extienda la educación de calidad y deje de reproducirse mecánicamente las brechas de desigualdad existentes en la sociedad.

En tercer lugar, se requiere una nueva constitución, que entregue un marco jurídico legítimo en su origen y compartido para un Chile democrático, donde no queden incrustaciones ideológicas de la dictadura y se consagren las libertades y los derechos civiles políticos, pero también los derechos sociales. Hoy existen las condiciones para llevar adelante este proceso y hacerlo de manera institucional y participativa.

Naturalmente no concluyen allí las reformas que plantea el programa de gobierno de Bachelet.

Chile enfrenta grandes desafíos en la consolidación de reformas ya en curso, como la salud y la protección social, pero son tareas iniciadas con éxito en gobiernos anteriores, que requieren más recursos y cobertura.

También necesita avanzar en la inclusión de las minorías étnicas y en temas estructurales como el energético.

¿Cómo realizar estas reformas asegurando una buena calidad de gobierno?

¿Serán capaces los partidos que apoyan a la Presidenta de transformarse a sí mismos y tender puentes virtuosos con el movimiento social y las nuevas formas de democracia virtual?

¿Será el mundo privado capaz de entender la necesidad de una economía de mercado con regulaciones y deberes societales donde la lógica del beneficio se combine con aquella de los bienes públicos?

Son todas preguntas cuyas respuestas dibujarán el futuro de Chile, y sólo los años que vienen nos dirán si se lograron.

Se trata de construir con éxito un segundo ciclo político, donde la creación de una sociedad más igualitaria se lleve a cabo a través de una reforma democrática, donde los cambios más profundos no sean fruto de un resurgimiento autoritario ni de un conflicto que destruya la cultura de convivencia tan dolorosamente lograda.

Ello requiere dejar de lado metáforas desagraciadas en el debate político, que implican destrucción y fuerza bruta, como las aplanadoras de una parte y las retroexcavadoras de otra.

La democracia se construye con un instrumental más noble. *EP*